

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN – CAUCA
J03cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

Auto número 3488

Popayán, Cauca, veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia:	VERBAL – RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
Demandante:	CLAUDIA ALEJANDRA ADRADA ERAZO
Demandados:	BANCO AV VILLAS Y OTROS
Radicado:	190014003003-2023-00738-00

1. ASUNTO A RESOLVER

En la fecha, viene a despacho el presente asunto, para resolver los recursos de reposición, presentados por los demandados: BANCO AV VILLAS, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., a través de sus apoderados judiciales, contra el auto No. 0304 del 09 de febrero de 2024, por el que se admitió la demanda verbal de la referencia.

SUSTENTO DEL RECURSO

Teniendo en cuenta que se trata de tres recursos, uno por cada demandado, se resumirán sus fundamentos por separado, pese a que, de la lectura de los memoriales, cuentan con identidad en lo que corresponde a la conciliación como requisito de procedibilidad.

BANCO AV VILLAS

El apoderado de la entidad bancaria demandada manifiesta que la demanda de la referencia no colma los requisitos formales de ésta, debiéndose inadmitir al tenor de lo previsto en el artículo 90 numeral 7 del C.G.P., que trata de la acreditación de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

Agregó que las medidas cautelares solicitadas, carecen de razonabilidad, en tanto que no se cumple con el fundamento de la apariencia de buen derecho, que indica que, de los documentales arrimados al proceso se pueda deducir con plausibilidad del derecho objeto de pretensión y que, en el presente asunto, la parte demandante no ha acreditado el incumplimiento de las obligaciones contractuales objeto de demanda.

Que, por lo anterior, solicita se reponga el auto admisorio y en su lugar se conceda el término previsto en el artículo 90 del C.G.P., para la subsanación de la demanda, con el fin de que acredite el agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.

Por su parte el apoderado de la sociedad demandada, solicita se revoque el auto admisorio de la demanda, aduciendo que ésta no cumple con los requisitos establecidos en los numerales 2,4,5 y 10 del artículo 82 del C.G.P. y lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 2213 de 2022 por lo siguiente:

“La información de la demandante y el perito no cumplen a cabalidad con lo preceptuado en el artículo 82 del Código General del Proceso y el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, puesto que no se señala su domicilio de la accionante, ni la dirección física y canal digital de notificaciones del perito Lilia Aurora

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN – CAUCA**
J03cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

Pineda Medina, además, frente a la información de notificación del perito, no se refiere bajo la gravedad de juramento si la misma se desconoce.

Por otra parte, los hechos 2.6.1 y 2.11 del escrito de la demanda no tienen la característica de ser determinados en tanto no hacen referencia a un fundamento fáctico concreto sino a las apreciaciones subjetivas del apoderado de la parte actora.

Adicionalmente a lo anterior, las pretensiones 3 y 3.1.3 carecen de precisión y claridad, en tanto la primera de ellas no guarda relación alguna con la consecución de la responsabilidad civil contractual, y la segunda, no es consecuente de la declaratoria de responsabilidad civil solicitada de forma inmediatamente precedente en el acápite de pretensiones.”

Que, por lo expuesto, solicita se revoque el auto del 09 de febrero de 2024 por el que se admitió la demanda de la referencia y se desvincule a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. del presente proceso.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

Por su parte, la referida sociedad solicita se revoque el auto admisorio de la demanda, teniendo en cuenta que al negarse la medida cautelar solicitada, debió acreditar el requisito de procedibilidad que trata el artículo 68 de la ley 2220 de 2022, que estableció la conciliación para procesos civiles.

Indicó que el auto que negó la medida cautelar se encuentra en firme y que, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no es suficiente con presentar la solicitud de medidas cautelares, sino que además deben ser viables.

Agregó que al no haber una medida cautelar viable y al no haberse acreditado el requisito de procedibilidad del agotamiento de la conciliación prejudicial, la consecuencia es la inadmisión, de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del artículo 90 del C.G.P.

Que por lo expuesto solicita reponer para revocar el auto admisorio de la demanda, inadmitiendo la misma, otorgando el término de cinco días para su subsanación.

2. TRASLADO DEL RECURSO

Es menester resaltar que atendiendo a las disposiciones del artículo 319 del Código General del Proceso, cuando el recurso se presenta por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria, por tanto, el mismo se surtió mediante fijación en lista realizada el 04 de julio de 2024, recibiendo memorial suscrito por el apoderado de la parte demandante dentro del término, aportando la constancia de no acuerdo No. 2024-0031 del 4 de julio de 2024, expedida por el Centro de Conciliación Restableciendo Lazos, diligencia realizada entre la demandante, señora CLAUDIA ALEJANDRA ADRADA ERAZO y los demandados ALKOSTO S.A., COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL – CLARO y el BANCO AV VILLAS.

PROBLEMA JURÍDICO

Establecer si en el presente asunto resulta procedente reponer para revocar el auto No. 0304 del 09 de febrero de 2024, por el que se admitió la demanda VERBAL DE RESPONSABILIDAD

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN – CAUCA**
J03cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

CIVIL CONTRACTUAL, promovida por la señora CLAUDIA ALEJANDRA ADRADO ERAZO, contra las sociedades BANCO AV VILLAS S.A., ALKOSTO S.A. y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A., para en su lugar inadmitir la demanda y otorgar el término de los cinco (5) días para su subsanación, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del C.G.P., y determinar si la solicitud de la medida cautelar de inscripción de la demanda eximía a la parte demandante de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, haremos referencia a las normas aplicables al caso en cuestión y, con base en ellas y en los argumentos y las pruebas aportadas, definir la prosperidad o no del recurso interpuesto.

3. CONSIDERACIONES

5.1 DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

El recurso de reposición según lo preceptuado en el artículo 318 del Código General del Proceso, procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen; doctrinalmente, recibe el nombre de recurso horizontal, en tanto se interpone y resuelve por el mismo juez que dictó la providencia impugnada, permitiéndole entonces, una nueva revisión sobre el asunto, para que reponga total o parcialmente su decisión o en su lugar, decida mantenerla; y procederá contra todos aquellos, frente a los cuales, la ley no disponga otra cosa.

5.2 OPORTUNIDAD PARA PROPONER RECURSO

Conforme con los artículos 318 y 302 del Código General del derecho se indica;

“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.”

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN – CAUCA**
J03cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

A su turno, el artículo 302 ibidem establece:

“Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.” (Subrayas del Despacho)

En el caso que nos ocupa, la providencia atacada fue notificada por estado electrónico el día 12 de febrero de 2024, mientras que los recursos de reposición fueron incoados por la parte demandada los días 24 de junio de 2024: ALKOSTO S.A., 25 de junio de 2024: BANCO AV VILLAS S.A. y 26 de junio de 2024: CLARO S.A.

Teniendo en cuenta que obran en el expediente las certificaciones de notificación por correo electrónico expedidas por la empresa de mensajería SERVIENTREGA, con constancia de recibido y lectura de mensaje de fecha 19 y 20 de junio de 2024 por parte de las sociedades demandadas, ello quiere decir que, los recursos en mención fueron interpuestos dentro del término hábil legal, en los términos establecidos en el artículo 8 de la ley 2213 de 2022.

5.3. DE LAS DEMANDAS CIVILES Y SUS REQUISITOS – CONCILIACIÓN PREJUDICIAL.

En virtud de que los tres recurrentes se refieren al tema de la conciliación como requisito de procedibilidad en este tipo de procesos, se analizará de manera conjunta dicho argumento.

El legislador, definió la conciliación como “(...) un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian.

*La conciliación, en sus diversas modalidades, es una figura cuyos propósitos son facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica, y servir como instrumento para la construcción de paz y de tejido social (...)*¹

Disponiendo a su vez, que los asuntos objeto de dicha institución jurídica, corresponde por principio general a “...todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición...” (Artículo 7 ley 2220 de 2022)

Por su parte, el artículo 67 de la ley 2220 de 2022 establece una regla general, en tanto dispone

¹ Artículo 3, ley 2220 de 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE CONCILIACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN – CAUCA**
J03cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

de forma clara que, para acudir a los estrados judiciales, si la materia objeto de litigio es conciliable, debe intentarse obligatoriamente la conciliación prejudicial, salvo cuando la ley lo excepcione, como ocurre con los asuntos laborales.

No obstante, existen dos excepciones para que aquella no sea exigida por los funcionarios judiciales; la primera, cuando bajo la gravedad de juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado, o que éste se encuentra ausente y no se conoce su paradero (parágrafo 2, art. 67 ibidem) y, la segunda cuando se solicite la práctica de medidas cautelares (parágrafo primero del artículo 590 del C.G.P.)

En ese contexto es pertinente citar lo que la Corte Constitucional, ha dicho acerca de la conciliación como requisito de procedibilidad, así: *“(...) la exigencia de la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad es un límite principalmente temporal para el acceso a la justicia del Estado, el cual sólo impone a las partes esperar que llegue la fecha fijada para la audiencia de conciliación, pero no las obliga a adoptar ninguna decisión dentro de esa audiencia. Las partes mantienen el control del proceso y de los resultados de la audiencia, pueden fijar la duración de esa audiencia, pueden decidir si concilian o no, pueden decidir autónomamente el grado de intervención del conciliador, cuyo papel se puede limitar a certificar los resultados de esa audiencia, o llegar a tener un rol más activo, facilitando la búsqueda de soluciones o proveyendo información experta necesaria para aclarar los puntos de discusión o formulando propuestas. Este límite temporal puede ser superado por voluntad de las partes, quienes, durante los primeros minutos de la audiencia de conciliación, por ejemplo, pueden manifestar su decisión de no conciliar y acudir directamente a la jurisdicción.”*²

Este límite temporal, a que alude la Corte y a voces de aquella, se instituye como un espacio de encuentro y diálogo para facilitar la resolución de los conflictos, en el cual no se despoja a las partes de la posibilidad de oponerse a las propuestas de arreglo que se formulen en ella, habida cuenta, que, en todo caso, los intervinientes detentan la oportunidad de acudir a la administración de justicia formal.

Al amparo de lo antes esbozado, la Jurisprudencia antes citada, ha entendido que son varios los fines que se buscan alcanzar por medio de la conciliación, y en especial con aquella que es necesaria agotar previamente a acceder a la justicia formal, a saber: (i) Garantizar el acceso a la justicia, pues propicia un espacio para ventilar las controversias que se suscitan entre individuos, de manera ágil en términos de tiempo y costos; (ii) promover la participación de los individuos en la solución de sus propias disputas, así como su intervención en la administración de justicia en calidad de conciliadores; (iii) estimular la convivencia pacífica, como fin esencial del estado según lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política; (iv) facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas; y (v) descongestionar los despachos judiciales.

Bajo esa perspectiva, el parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso no puede ser interpretado de forma aislada, pues debe leerse de forma sistemática, esto es indagando la naturaleza del proceso que se entabla y por tanto, verificando que las disposiciones normativas adjetivas llamadas a gobernar el mismo permitan que determinada medida cautelar sea adoptada en él, en tanto ello evita que so pretexto de la solicitud de una medida cautelar abiertamente impertinente, se evada el cumplimiento del requisito de procedibilidad en mención.

² Corte Constitucional. Sentencia C-1195 de 2001.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN – CAUCA
J03cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

En el caso concreto, se observa que, si bien inicialmente en el auto admisorio de la demanda de la referencia se fijó caución, previo al estudio y decreto de las medidas cautelares solicitadas y se eximió a la parte actora de agotar el requisito de procedibilidad, dichas cautelares fueron negadas por improcedentes en la misma providencia de fecha , al advertirse imprecisión en la solicitud.

No obstante, ha de recalcarse que dentro del traslado de los recursos objeto de estudio, el apoderado judicial del extremo activo aportó la constancia fracaso de conciliación prejudicial, realizada el día 04 de julio de 2024 entre las partes de este proceso verbal, cumpliendo con la carga establecida tanto en el estatuto procesal, como en la ley 2220 de 2022, que reglamenta la conciliación, razón por la que se confirmará la providencia recurrida en lo que respecta al cumplimiento del requisito de procedibilidad.

5.4. DE LOS OTROS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

Ahora bien, respecto de las causales adicionales de inadmisión de la demanda señaladas por el apoderado de la empresa COMCEL S.A. en su recurso de reposición, previstas en los numerales 2,4,5 y 10 del artículo 82 del C.G.P. y lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 2213 de 2022, el despacho procede a su estudio.

Sobre el reclamo efectuado por el recurrente, al no haberse indicado presuntamente los datos de ubicación de la demandante y la perito, de la revisión del libelo se evidencia que contrario a lo manifestado por el recurrente, sí se aportaron los datos de la demandante al siguiente tenor:

IX. NOTIFICACIONES.

PARTE ACTORA:

CLAUDIA ALEJANDRA ADRADA ERAZO, dirección carrera 17 #33 N-48 Interior 3 en el Correo electrónico, clauadrada@yahoo.com Tel. 3146306892.

Pese a que no se colocó en los apartes resaltados por el recurrente, sí se indicaron los datos referidos en el acápite correspondiente de la demanda denominado “notificaciones”, razón por la que esta causal de inadmisión señalada por el recurrente, no está llamada a prosperar, al haberse cumplido con lo previsto en el artículo 82 del C.G.P., en concordancia con el artículo 6 de la ley 2213 de 2022.

En lo que respecta a la prueba pericial, en la que el reclamante afirma que se omitieron los datos de ubicación de la perito, se observa en la demanda que el apoderado de la parte actora **anuncia** que presentará prueba psicológica elaborada por la profesional LILA AURORA PINEDA MEDINA, con el fin de determinar el daño inmaterial causado a la demandante, es decir que no está solicitando la declaración de la citada profesional como testigo, ni perito, por lo que no es menester que aporte sus generales de ley desde la demanda; lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene el Juzgador de citar a la experta si a bien lo considera y en el evento descrito en el artículo 228 del C.G.P.

Sin embargo, a folio 18 del expediente digital, reposa el dictamen pericial anunciado, del que se correrá traslado en el momento procesal correspondiente, en los términos y para los fines del artículo 228 del C.G.P., razón por la que tampoco procede dicha manifestación del

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN – CAUCA**
J03cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

recurrente.

Sobre las expresiones realizadas por el recurrente respecto de algunos hechos y pretensiones de la demanda, de la lectura de éstas se tiene que se trata de afirmaciones que podrían manifestarse con la contestación de la demanda, al no observarse una indebida acumulación de pretensiones, ni una falta de claridad sobre los hechos que amerite su inadmisión.

No obstante lo anterior, también debe atenderse que el juez al interior del proceso no cumple una labor mecánica y como tal, se encuentra obligado a interpretar la demanda cuando su sentido genuino no aparezca claro, ello con el fin de garantizar a las partes el acceso pleno y efectivo a la administración de justicia; así lo precisó la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC6507-2017, al reiterar jurisprudencia previa: *“...el juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jurídico, pero no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia, y así por contera superar la indebida calificación jurídica que eventualmente le haya dado la propia parte demandante.”*

Por lo expuesto, no es de recibo los argumentos esgrimidos por el apoderado del demandado CLARO S.A., sobre la falta de claridad en los hechos y pretensiones, máxime cuando, se reitera, no se observa una indebida acumulación de pretensiones y los fundamentos fácticos son susceptibles de interpretación, insistiendo que toda valoración se realizará en el momento procesal que corresponda.

Finalmente, sobre la solicitud de desvinculación de la presente demanda de la compañía COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A., la misma se rechaza de plano por improcedente, toda vez que es en el decurso del proceso y al momento de que el Juzgado tome la decisión que en derecho corresponda, que se pronunciará sobre este tema, en caso de una eventual sentencia favorable, acerca de los civilmente responsables, de conformidad con las pruebas obtenidas en el trámite y en aplicación de la sana crítica.

6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

En ese orden, como quiera que la causa principal de los recursos de reposición contra el auto admisorio de la demanda de la referencia, cuál era la no acreditación del agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial al no haber sido procedentes las medidas cautelares solicitadas con la demanda, fue superada con la remisión de la respectiva constancia de fracaso de conciliación por parte del extremo activo, diligencia a la que asistieron todas las partes y, al haberse concluido que las demás causales alegadas por el apoderado de la compañía COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A., como de inadmisión, carecen de razón; en aplicación del principio de economía procesal, resulta innecesario y dilatorio revocar el auto admisorio de la demanda para inadmitir y otorgar un término de cinco días al demandante para subsanar señalado, cuando el documento echado de menos ya obra en el expediente y la parte recurrente colaboró en su elaboración, para llegar al mismo resultado.

Lo expuesto, tiene su fundamento en el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y en lo previsto en el artículo 11 del C.G.P. que prevé que *“...El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias...”*, evitando incurrir en un exceso ritual manifiesto que afecte la duración razonable del proceso de forma injustificada, máxime cuando no se advierte causal de nulidad que afecte la continuidad de éste.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN – CAUCA
J03cmpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

Por lo anterior, no se accederá a la solicitud de reponer para revocar el Auto 0304 del 09 de febrero de 2024, por el que se admitió la demanda de la referencia, debiéndose proseguir con las etapas procesales subsiguientes.

Finalmente, se le reconocerá personería adjetiva para actuar a los apoderados de las demandadas, en los términos de los poderes a ellos conferidos.

Por lo anteriormente expuesto, el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN,

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER PARA REVOCAR y por ende, **CONFIRMAR** el Auto No. 0304 del 09 de febrero de 2024 por el que se admitió la presente demanda VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL promovida por la señora CLAUDIA ALEJANDRA ADRADA ERAZO, a través de apoderado judicial, contra BANCO AV VILLAS S.A., COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., por los argumentos esbozados en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: TENER al abogado JUAN CARLOS ACOSTA GARAY, portador de la T.P. 196.387 del C.S.J como apoderado judicial del demandado BANCO AV VILLAS S.A., en los términos del poder a él conferido.

TERCERO: TENER al abogado GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, portador de la T.P. 39.116 del C.S.J como apoderado judicial de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en los términos del poder a él conferido.

CUARTO: TENER al abogado URIEL MORENO CARDOZO, portador de la T.P. 42.108 del C.S.J como apoderado judicial de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., en los términos del poder a él conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,

DIANA PATRICIA TRUJILLO SOLARTE

DCLR